

Los servicios sociales han de crecer para preservar el Estado Social

Iñigo Lamarca Iturbe

Resumen

El trabajo social, es decir las tareas que llevan a cabo las y los trabajadores sociales en los servicios sociales, es un pilar básico del llamado Estado Social, que ha de ser preservado por las obligaciones que la Constitución Española y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales suscrito por España impone a los poderes públicos y también porque es una cuestión de derechos humanos y un imperativo ético. La crisis económica y las políticas presupuestarias no deben ser freno al necesario crecimiento de los servicios sociales.

Palabras clave

Servicios sociales, Trabajo social, Trabajadores sociales, Derechos sociales, Estado Social, derechos humanos, garantía de derechos, exclusión social, derecho a la dignidad, derecho a la igualdad, discriminación, inclusión social, cohesión social.

Abstract

Social work, i.e. the work carried out by social workers in social services, is a basic pillar of the so-called Social State, which must be preserved by the obligations that the Spanish Constitution and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights signed by Spain impose upon the public powers and also because it is a question of human rights and an ethical imperative. The economic crisis and budgetary policies must not restrain the necessary growth of the social services.

Keywords

Social services, social work, social workers, social rights, social state, human rights, guarantee of rights, social exclusion, right to dignity, right to equality, discrimination, social inclusion, social cohesion.

Iñigo Lamarca Iturbe

Licenciado en Derecho
Ararteko, Defensor del pueblo del País Vasco.
i-lamarca@ararteko.net



Introducción

Este es un texto que desarrolla brevemente la intervención que hice en el acto de clausura de las I Jornadas Estatales de Servicios Sociales Municipales que tuvieron lugar en Barakaldo en junio de 2014 organizadas por el Consejo General del Trabajo Social. Quiero agradecer al Consejo la oportunidad que me brinda para incluir esta colaboración en esta revista. Y quiero agradecer con particular énfasis a las y los trabajadores sociales el trabajo que llevan a cabo, magnífico y necesario, en condiciones harto difíciles.

1. La importancia del trabajo social

El trabajo social, es decir las tareas que llevan a cabo las y los trabajadores sociales es una necesidad de primer orden. Debería por tanto ser prioritario para las políticas públicas y presupuestarias y, además, es uno de los pilares sobre el que ha de asentarse el Estado social y democrático de Derecho.

Desde la perspectiva del Ararteko o defensor del pueblo del País Vasco, organismo definido como el alto comisionado del Parlamento Vasco para la defensa de los derechos constitucionales, es evidente que el trabajo social, que gestiona muchas prestaciones asociadas al Estado social o derivadas de él y del ejercicio de los derechos sociales, constituye y debe constituir un componente fundamental de la organización y el funcionamiento de las administraciones públicas. Dicho con otras palabras: sin la existencia de unos buenos servicios públicos de trabajo social, el Estado Democrático de Derecho perdería una de sus principales razones de ser y se vería gravemente mermado en su dimensión de Estado

Social; en consecuencia, estaríamos asistiendo a una vulneración de la Constitución, así como del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante, PIDESC), suscrito por España.

El Ararteko elaboró en 2010 un informe extraordinario bajo el título “La situación de los servicios sociales de base en la Comunidad Autónoma del País Vasco”. En ella alertábamos sobre un deterioro en la situación de los servicios sociales de base, que lo atribuíamos a diversas causas, entre ellas “el desajuste que existe entre las funciones que la normativa vigente atribuye a los servicios sociales de base y los recursos técnicos y humanos que se han puesto a su disposición para poder cumplirlas”. Decíamos que las necesidades que atiende el Sistema de Servicios Sociales y los recursos que gestiona se habían multiplicado de forma exponencial, con un notable incremento de los servicios y prestaciones a los que se accede a través de los servicios sociales de base. Y eso que no había estallado aún, en toda su intensidad y crudeza al menos, la maldita crisis socioeconómica.

En el citado informe poníamos de manifiesto la necesidad de que se organizase un verdadero sistema de servicios sociales: único, coherente, armónico, eficaz e integral, en el que los servicios sociales de base fuesen la puerta de entrada al sistema.

El Ararteko realiza un seguimiento periódico de sus informes. Pues bien, podemos afirmar que el diagnóstico y las recomendaciones que incluía ese informe siguen plenamente vigentes. Es más, como consecuencia de las necesidades derivadas de la mencionada crisis, las recomendaciones referidas han cobrado un nuevo valor, han adquirido una importancia mayor.

Se detecta un cierto vaciamiento de las funciones de los servicios sociales de base que guarda relación, entre otras razones, con el hecho de la infradotación económica y de recursos que aqueja a estos servicios e implica, entre otros aspectos, el desaprovechamiento del conocimiento y la experiencia acumulados por los mismos.

Podemos constatar, asimismo, las dificultades actualmente existentes para el refuerzo del trabajo social comunitario, el escaso desarrollo de la cada vez más necesaria atención sociosanitaria o, en otro orden de cosas, las insuficiencias en materia de formación y también de supervisión, acompañamiento y apoyo a las tareas de las y los trabajadores sociales.

Estas carencias, deficiencias e insuficiencias existen en toda España. Se puede afirmar, por ello, sin riesgo de equivocación, que el estado de los servicios sociales, que en buena medida son gestionados por las y los trabajadores sociales, dista mucho de estar situado en parámetros exigibles a un Estado Democrático de Derecho y ello trae como consecuencia una extrema debilidad de las condiciones del ejercicio de los derechos sociales reconocidos en la Constitución Española y en el PIDESC.

Debemos recordar que los derechos sociales y el Estado Social tienen como fundamento último garantizar la vida digna y la igualdad material (o igualdad real y efectiva, según la expresión empleada por nuestra Constitución) a todas las personas. Algunos de esos derechos (la educación y la salud, principalmente) son gestionados por profesionales específicos, pero todo lo relacionado con la protección social (de menores, de personas con dependencia o discapacidad, de personas mayores en general, de personas que se hallan

en situación o riesgo de exclusión social, etc.) es gestionado por los servicios sociales. Por tanto, la existencia de un buen Sistema de Servicios Sociales (tanto primarios como especializados) resulta de vital importancia para que los derechos fundamentales básicos (que a su vez constituyen derechos-madre de todos los derechos sociales) a la vida digna y a la igualdad real y efectiva estén razonablemente garantizados.

2. El aumento de la pobreza y del riesgo de exclusión social como consecuencia de la crisis

Por abundar más en la materia, conviene subrayar, en estos tiempos de crisis, la realidad de exclusión social. El mismo se suele asociar habitualmente con situaciones que se hallan, en términos socioeconómicos, por debajo de los niveles mínimos de una vida digna, es decir en una situación de pobreza (extrema, si, según los criterios de Naciones Unidas, el nivel de ingresos es inferior al 40% de la media de un territorio; relativa si es inferior al 60%). Son muchos los informes y estudios que señalan que en España se ha producido un aumento espectacular de los niveles de pobreza. Las personas sin hogar o con ingresos económicos insuficientes se adscriben claramente a la categoría de excluidos sociales porque permanecen extramuros del sistema social o en situaciones de enorme precariedad o vulnerabilidad. Desde la posición de observador privilegiado de la realidad social que supone estar al frente de una institución que tiene naturaleza de *ombudsman* como es el Ararteko, debo decir, en cualquier caso, que el parámetro de la vida digna desde el que se articula el concepto al que nos estamos refiriendo demanda incluir en dicho concepto múltiples realidades: parados de larga duración, personas con precarie-

dad laboral permanente o con sueldos bajísimos -lo cual las deja en los linderos de la pobreza pero sin opciones de ayudas económicas- mujeres al frente de familias monoparentales o con cargas familiares no compartidas, gitanos, extranjeros “sin papeles” con trabajos clandestinos en donde son explotados, transexuales, prostitutas, enfermos mentales crónicos sin redes de apoyo, personas que salen de prisión y que sienten deseos de volver a ella porque carecen de recursos para manejarse en la vida, pensionistas con ingresos insuficientes (sobre todo viudas) y con escasa protección social, personas mayores dependientes que viven solas, etc.

Existe, además, una segunda dimensión del binomio exclusión/inclusión, con múltiples cruces y zonas comunes con la anterior. Me refiero a todo aquello que tiene que ver con la identidad de la persona humana en relación con los ámbitos grupales en los que se socializa, a lo que con muchos matices podríamos denominar identidad cultural. Siendo como somos los humanos seres sociales, la posición que ocupamos en una sociedad determinada dotada de un sistema de valores y de un sistema de organización deviene en una cuestión capital por cuanto que determina el grado de inclusión en ella, de manera que se establecen, a modo de capas de una cebolla, diferentes niveles de pertenencia a una sociedad determinada así como situaciones de exclusión, de periferia o de marginación del sistema social existente.

Un elemento clave en la cuestión referida es el grado de proximidad o alejamiento de los elementos que integran la identidad polifacética de la persona con respecto a los valores e ideas hegemónicas que conforman un sistema social, es decir con respecto a su basamento ideológico dominante -las comúnmente llamadas normas

sociales-, porque de ello derivará el grado de inclusión que cada individuo sienta en la comunidad en la que vive. Ello nos lleva necesariamente al vasto campo de la discriminación por razón de una circunstancia personal que incide negativamente en el disfrute de los derechos sociales. El hecho de ser mujer, extranjero, homosexual, transexual o gitano, o el hecho de poseer algún elemento que produce discapacidad física o mental o simplemente dependencia produce situaciones de desigualdad y éstas contravienen, por ello, el valor y principio supremo sobre el que descansa todo el sistema de los derechos sociales: la igualdad. Pero no sólo eso. Un estudio auspiciado por el Ararteko en 2007 concluyó que las desigualdades de género, de renta y las derivadas del origen de las personas tienen incidencia en la salud, de suerte que las mujeres (a pesar de que vivan más años) tienen, por término medio, una salud peor que la de los hombres. Algo semejante ocurre, según el referido estudio, con las personas que se hallan en situación de pobreza con respecto a las más acomodadas y con los inmigrantes en relación con los nativos.

3. Los servicios sociales como garantía de los derechos sociales

“Las medidas regresivas en relación con los derechos socioeconómicos son en principio inadmisibles”. Esta afirmación está contenida en un estudio del Ararteko hecho público en junio de 2012 sobre la exigencia de que los derechos humanos (sobre todo su sistema de garantías) estén en la base de las políticas públicas, especialmente en estos tiempos de crisis. En dicho estudio estudiamos las obligaciones derivadas de las disposiciones constitucionales así como del PIDESC. Decíamos lo siguiente en una de las conclusiones:

“La obligación de realizar progresivamente los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) conlleva también una prohibición de medidas regresivas o de retroceso deliberado. No se puede adoptar medidas encaminadas a reducir el nivel de protección que algunos derechos ya hayan alcanzado. La restricción o limitación de los derechos que ya se han plasmado o la derogación de la legislación necesaria para ejercer un derecho son ejemplos de medidas de retroceso deliberadas, que el Comité DESC de Naciones Unidas considera una violación *prima facie* del PIDESC, a menos que el Estado pueda demostrar que se justifican plenamente por la referencia a la totalidad de los derechos previstos en el pacto y en el contexto de la plena utilización del máximo de los recursos disponibles. Por lo tanto, el Estado soporta la carga de justificar ante la ciudadanía la idoneidad de sus políticas”.

Los poderes públicos no deberían escudarse en las restrictivas políticas presupuestarias impuestas por la Unión Europea para introducir, como están haciendo muchas de ellas, elevados recortes en las partidas destinadas a los servicios y a las prestaciones sociales.

Hay argumentos éticos y jurídicos sólidos para impugnar dicha política. Por lo que respecta al Ararteko, esos argumentos están expresados en un artículo publicado en el volumen XII de los Cursos de Derechos Humanos de Donostia-San Sebastián (Aranzadi, 2012). No los vamos a reproducir aquí, pero sí es importante poner el énfasis en estas ideas principales: 1)- La crisis comenzó en Estados Unidos con la quiebra en septiembre de 2008 de la banca de inversiones Lehman Brothers, que desveló la existencia de unas fallas tremendas en el sistema financiero, que estuvo a punto de derrumbarse;

no se estuvo lejos del crash financiero de 1929. 2)- En España la crisis ha sido particularmente grave porque estalló la tremenda burbuja inmobiliaria que ninguna autoridad -política, económica o financiera- vio venir o quiso ver y, en cualquier caso, hizo nada para que dicha burbuja se deshinchase progresivamente sin causar tanto destrozo. 3)- En EEUU, en la Unión Europea y en España se inyectaron ingentes cantidades de dinero público al sistema financiero, a través de los bancos centrales o directamente de los gobiernos. No ha habido restricciones ni límites para ello. Los bancos centrales han prestado a un interés ínfimo -muy inferior al que tienen que abonar las administraciones públicas- sumas astronómicas de dinero a las entidades financieras privadas. 4)- La deuda pública de las administraciones públicas de España era, cuando estalló la crisis, de un 68% del PIB, inferior a la de Alemania. El gran problema de España era, y sigue siéndolo, la descomunal deuda que han acumulado corporaciones y empresas privadas y algunas entidades financieras, así como las familias. 5)- En cualquier caso, como resultado de la crisis se ha elevado la deuda pública española hasta el 100% del PIB (principalmente, por el descenso de los ingresos fiscales a causa del incremento tremendo del desempleo, y por el aumento del gasto social asociado a las prestaciones del paro), a lo que habría que sumar la devolución del préstamo de 42.000 millones de euros que la Unión Europea prestó al Reino de España para salvar de la quiebra a algunas antiguas cajas de ahorro (básicamente, Bankia, Caixa Catalunya y Nova Caixa Galicia). Ahora bien, existen fórmulas para aliviar la carga financiera de esa deuda que las autoridades de la UE no quieren aplicar: la mutualización de la deuda a través de los eurobonos o la reducción del tipo de interés de esa deuda si el Banco Central Europeo prestase directamente -y no a través de los bancos- a los Estados-. El ex primer ministro francés Michel Rocard y el economista Pierre Larrouturnou

se preguntaban, en un artículo de opinión publicado en “Le Monde” el 2 de enero de 2012 -reproducido días más tarde en “El País”- por qué los Estados (es decir, los ciudadanos) tenían que pagar por sus deudas 600 veces más que los bancos y ofrecían fórmulas para una disminución radical de los costes financieros de las deudas de las administraciones públicas. Así las cosas, resulta inmoral, contraria a los principios fundacionales de la UE, y vulneradora de los derechos fundamentales -reconocidos por la UE- que exista una política presupuestaria con el único objetivo de reducir las deudas y los déficits públicos sin que, junto a ella, existan políticas sociales y económicas serias y dotadas con suficiencia económica, que tenga como objetivo crear empleo y combatir la exclusión social y las desigualdades crecientes.

Por otra parte, aun cuando no se modificara la política de los órganos rectores de la UE (que ha sido criticada hasta por el Papa, en un reciente discurso pronunciado en el Parlamento Europeo), existe margen para que los poderes públicos y administraciones públicas españoles pudieran mejorar las políticas públicas relacionadas con los servicios sociales: Bruselas exige que el déficit presupuestario no sobrepase una determinada cifra, pero cabe aumentar los ingresos fiscales (combatiendo con más eficacia el fraude fiscal, por ejemplo) o calificar como prioritario el gasto social relacionado con los servicios sociales (ello depende de la política presupuestaria que quiera aplicarse, obviamente)

4. El trabajo social y los servicios sociales han de ser incrementados

Estamos asistiendo al alumbramiento de un nuevo escenario social en el que las prestaciones de

los servicios sociales (sobre todo de los servicios sociales de base) van a ser, reiterando lo que decíamos al principio, determinantes.

Las necesidades de asistencia a los niños, niñas y adolescentes están creciendo (familias desestructuradas, problemas de trastornos mentales o trastornos de personalidad, fracaso escolar, problemas de inclusión o de integración social, etc.). Las necesidades de atención a las personas dependientes o con discapacidad están también creciendo. Las bolsas de pobreza y de exclusión social están aumentando. Los servicios asociados a la inclusión y cohesión sociales demandan un fuerte incremento para preservar los principios y derechos constitucionales vinculados al Estado social.

Además, si las políticas públicas generan los recursos y medios adecuados para atender adecuadamente esas necesidades, las oportunidades de empleo tenderán a crecer. Parece evidente que los yacimientos de empleo más importantes se hallan, precisamente, en los servicios sociales. Los niveles de prestaciones y de personas empleadas en este campo en España con respecto a los países europeos con los que nuestro país está homologado en el terreno socioeconómico, son inferiores a los de éstos. Están en juego las garantías de los derechos fundamentales a la dignidad de la persona, a la salud, a la igualdad real y efectiva, a la educación, al trabajo, a la vivienda etc.

5. Breves conclusiones

El Estado Social y los derechos sociales tienen, pues, por delante en nuestro país un amplio recorrido hasta alcanzar niveles óptimos. Mencionaremos seguidamente los ámbitos o situaciones que

habrían de ser objeto de una ampliación o profundización de las políticas públicas asociadas a los fundamentos del Estado Social:

- 1) Los servicios de asistencia a las personas dependientes, esto es a personas que tienen limitada su autonomía personal (personas con discapacidad, personas con enfermedades mentales, personas con enfermedades crónicas, personas con enfermedades raras etc.)
- 2) Asistencia a las personas mayores en general. Se prevé que en 2020 una de cada cuatro personas tendrá en España más de 65 años. Aún cuando la mayoría de estas personas disfrutarán de una situación de autonomía personal casi plena, la preservación de su salud y de su calidad de vida demandarán la habilitación de recursos de carácter socio-sanitario-cultural. La asistencia y atención domiciliaria tiene un amplio desarrollo en el futuro próximo si queremos homologarnos a los países más avanzados.
- 3) Servicios de cuidado a niños y niñas de 0 a 3 años para posibilitar la conciliación de la vida familiar y laboral y para favorecer el incremento de la natalidad.
- 4) Recursos y servicios para atender debidamente las necesidades de niños, niñas y adolescentes con trastornos de conducta.
- 5) Servicios sociales para prevenir, detectar y atender situaciones de pobreza y de exclusión social y para trabajar en programas de inclusión social.
- 6) Recursos, programas y desarrollo de planes para trabajar en el ámbito de la igualdad y de

la erradicación de actitudes y contravalores sexistas, machistas, racistas, xenófobos, homófobos etc.; recursos para trabajar en la prevención, detección y atención de situaciones de maltrato a mujeres víctimas de violencia de género, a personas mayores víctimas de maltrato, a adolescentes y adultos de orientación homosexual o de identidad transexual, a personas inmigrantes, a personas gitanas, etc.

- 7) Mejora y aumento de los servicios ligados al derecho a la educación, sobre todo en lo relativo a la educación especial, a la educación en valores, a los servicios que permitan una mejor conciliación de la vida laboral y familiar de los padres y madres, a la formación de los maestros, maestras y profesores/as, al reforzamiento de los servicios auxiliares, etc.
- 8) Mejora y aumento de los servicios ligados al derecho a la salud. Cabe mejorar la asistencia domiciliaria a los enfermos crónicos, falta por desarrollar los servicios de naturaleza socio-sanitaria, así como los de carácter socio-educativo-sanitario.

BIBLIOGRAFÍA

Bacigalupe, A., Martínez, U. (2007). *Desigualdades sociales en la salud de la población de la CAPV. La clase social y el género como determinantes de la salud*. Vitoria-Gasteiz. Ararteko-Colección Juan San Martín (disponible en www.ararteko.net)

Arnos, M. y otros (2011) *Acceso de la población inmigrante en la CAV a los servicios y prestaciones*. Ararteko-Colección Juan San Martín (disponible en www.ararteko.net)

Ararteko (2010). *La situación de los servicios sociales de base en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Informe extraordinario*. Vitoria-Gasteiz. Autor. (disponible en www.ararteko.net)

Rocard, M. y Larrourou, P. “Una Europa al servicio de los ciudadanos” Artículo de opinión. El País, 6 de enero de 2012

Ararteko (2012) *Los derechos humanos como base de las políticas públicas en tiempos de crisis económica. Estudio del Ararteko*. Vitoria-Gasteiz. Autor (disponible en www.ararteko.net)

Ararteko (2012) *Los derechos sociales en tiempos de crisis. Jornadas organizadas por el Ararteko*. Vitoria-Gasteiz. Ararteko-Colección Francisco de Vitoria, jornadas y foros. (disponible en www.ararteko.net)

Lamarca, I. (2012) “Los mercados financieros contra los derechos humanos”. En Soroeta, J. (coord.) “Los derechos económicos, sociales y culturales en tiempos de crisis. Cursos de Derechos Humanos de Donostia-San Sebastián. Volumen XII” Madrid. Editorial Aranzadi.

Ararteko (2013) *El impacto de la crisis en la infancia: la realidad vasca. Estudio del Ararteko*. Vitoria-Gasteiz. Autor (disponible en www.ararteko.net)